



7

Rompiendo la relación entre recursos y represión

Michael Renner

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha descrito Angola como el peor lugar del mundo para ser niño. Casi el 30% de los niños angoleños muere antes de cumplir los seis años y cerca de la mitad sufre desnutrición. Dos tercios de la población apenas sobreviven con menos de un dólar diario y un 42% de los adultos es analfabeto. Recortes en la comida, agua de potabilidad dudosa y una carencia de higiene y servicios sanitarios se han combinado para limitar la esperanza de vida a sólo 47 años (baja, incluso para los estándares subsaharianos). El Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una medida general del progreso social y económico, situó en 2001 a Angola en la posición 160 entre 174 países.¹

Con amplios yacimientos de diamantes, petróleo y otros recursos naturales, Angola no debería estar en los peldaños inferiores de la escala social mundial. Pero más de un cuarto de siglo de brutal guerra civil ha destruido la economía, ha desplazado a cerca de cuatro millones de personas —uno de cada tres angoleños— y ha dejado a aproximadamente un millón dependiendo de la ayuda internacional para comer. Mientras la mayor parte de la población vive en la miseria y el terror, los líderes, tanto de las fuerzas gubernamentales como del grupo rebelde Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) han empleado la mayor parte del dinero que ganan vendiendo los recursos de Angola en

255



comprar armas y engrosar sus propios bolsillos. Las diferencias ideológicas que en un principio hicieron estallar la guerra se han perdido, pero la codicia por los recursos y la corrupción han demostrado ser un poderoso carburante para su continuación. En lugar de una promesa, los diamantes y el petróleo han resultado una maldición.²

Aunque es un caso extremo, Angola es sólo uno de los numerosos lugares del mundo donde hoy en día la abundancia de recursos alimenta el conflicto (Ver Tabla 7-1). En conjunto, cerca de una cuarta parte de las 49 guerras y conflictos armados librados durante el año 2000 tenía una fuerte relación con los recursos, en el sentido de que su explotación legal o ilegal ha ayudado a desencadenar o exacerbar conflictos violentos o ha financiado su continuación.³

A finales de 2001, los conflictos no están en la agenda de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo. Pero éste es, sin duda, un asunto de gran importancia. La seguridad humana básica —la ausencia de conflicto violento— es una condición previa para una sociedad sostenible. Y muchos de los conflictos contemporáneos relacionados con la explotación de recursos se libran en áreas de gran valor medioambiental. La República Democrática del Congo (ex Zaire), Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Colombia, por ejemplo, suman juntos el 10% de los bosques intactos del mundo. Ésos y otros países donde se están produciendo conflictos por los recursos albergan algunos de los puntos calientes de la biodiversidad mundial. También son los que sufrieron la mayor pérdida neta de área forestal en los años noventa a causa de talas ilegales y multitud de factores.⁴

La relación entre recursos y conflicto

Hay cada vez más preocupación por los estrechos vínculos entre extracción ilegal de recursos, tráfico de armas, conflicto violento, violación de los derechos humanos, desastre humanitario y destrucción medioambiental. Grupos de expertos designados por Naciones Unidas han investigado los casos de Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo. Varios grupos de la sociedad civil han lanzado una campaña contra los «diamantes de conflicto» en esos países y, a la vez, han arrojado luz sobre otros conflictos por los recursos. Las prácticas de industrias y empresas se es-



tán observando de cerca. Los reportajes en los medios de comunicación han ayudado a trasladar estas preocupaciones a una audiencia más general. Todo esto se combina con un incremento del debate sobre la proliferación de armas ligeras sin registrar, las armas preferidas en los conflictos por recursos.

En algunos lugares el pillaje de petróleo, minerales, metales, gemas o madera permite que continúen guerras desencadenadas por otros factores, en muchos casos debidas inicialmente a antagonismos o luchas ideológicas financiadas por las superpotencias u otros apoyos externos. En otros lugares, el botín de la naturaleza atrae a grupos que pueden alegar estar motivados por disputas no resueltas como la opresión política o la denegación de derechos para las minorías pero que son, en realidad, empresarios criminales intentando hacerse ricos con la extracción ilegal de recursos. Inician la violencia no para derrocar un gobierno sino para lograr y mantener el control sobre recursos lucrativos, habitualmente una de las pocas fuentes de riqueza. Los favorece el hecho de que muchos países están debilitados por gobiernos pobres o represivos, servicios públicos que se desmoronan, falta de oportunidades económicas y grandes diferencias sociales.

Hay un aspecto más en la relación entre recursos y conflicto: las repercusiones de la extracción en sí misma. En muchos países en vías de desarrollo, los beneficios económicos de las operaciones de minería y tala se concentran en una pequeña elite industrial o gubernamental y en inversores extranjeros. Pero una serie de cargas, desde la expropiación de tierras a trastornos en las formas de vida tradicionales, devastación medioambiental y penurias sociales, recaen sobre los hombros de la población local. Habitualmente estas comunidades no son informadas ni consultadas sobre los proyectos de extracción de recursos. Esto ha llevado a conflictos violentos en lugares como el Delta del Níger en Nigeria, Bougainville en Papúa Nueva Guinea y varias provincias de Indonesia. Más que una guerra abierta, estos conflictos normalmente consisten en refriegas de baja escala, bloqueos de carreteras, actos de sabotaje y violaciones masivas de los derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad del Estado y grupos rebeldes.

Este capítulo se ocupa de los recursos naturales extraídos en actividades de minería o tala, pero hay otros conflictos por recursos alrededor del mundo. Muchas disputas locales y regionales giran en torno al acceso equitativo a terrenos cultivables y agua, aunque esos recursos no son fácilmente comercializables y, en con-



Tabla 7-1. Ejemplos seleccionados de conflictos por recursos

Ubicación y recursos	Observaciones
Colombia – petróleo	Desde 1992 se ha aplicado un «impuesto de guerra» (de más de un dólar por barril) a las empresas petroleras extranjeras, destinado a financiar la defensa de las plantas petroleras por parte de las Fuerzas Armadas contra los ataques de los rebeldes. Occidental Petroleum también efectuó pagos directos al ejército. Los grupos guerrilleros han obtenido aproximadamente 140 millones de dólares procedentes de la extorsión a las petroleras. El petróleo es el producto de exportación más importante de Colombia, pero la mayoría de la gente ve pocos beneficios, y los grupos indígenas como los U'wa temen una creciente invasión de la industria petrolera. Las protestas contra los proyectos han llevado a la represión militar.
Sudán – petróleo	La guerra civil se reinició en 1983 (el gobierno rompió un acuerdo de paz después de descubrir petróleo en 1980) y ha provocado más de dos millones de muertos, un millón de refugiados y cuatro millones y medio de personas desplazadas. Las exportaciones de petróleo, que comenzaron en 1999, están financiando la escalada del conflicto: los beneficios del petróleo pagan las importaciones de armas y han permitido triplicar los gastos militares; las rutas terrestres y los espacios aéreos de la industria petrolera son utilizados por el ejército. Con el fin de despoblar las zonas productoras y aquellas potencialmente ricas en petróleo del sur de Sudán, las fuerzas gubernamentales bombardean poblados, destruyen cosechas, saquean los víveres y favorecen las guerras intertribales mediante el suministro de armas a algunas facciones. Las instalaciones petrolíferas se han convertido en objetivo de las fuerzas de oposición.
Chad y Camerún – petróleo	La supresión de una revuelta en la región de Doba, en Chad (donde la producción de petróleo se iniciará en 2003) supuso cientos de muertos. En el año 2000, el gobierno de Chad compró armas con una parte de los «bonos», por valor de 25 millones de dólares, pagados por ExxonMobil, Chevron y Petronas. La construcción de un oleoducto hasta la costa de Camerún amenaza el territorio de los pigmeos baka y puede llevar la caza furtiva y la tala descontrolada hasta las zonas selváticas atlánticas.





Tabla 7-1 (continuación)

Ubicación y recursos	Observaciones
Afganistán – esmeraldas, lapislázuli, opio, heroína	El tráfico de opio ayudó a costear la lucha contra los soviéticos y la posterior guerra civil entre las facciones <i>muyahidin</i> . Ha sido una fuente de ingresos crucial para el régimen talibán, con la que financiar la guerra civil que tiene lugar desde mediados de los años noventa y que proporciona unos beneficios de hasta 50 millones de dólares al año. La producción de opio aumentó de 10 toneladas a finales de los años setenta a 1.200 toneladas en 1989 y 4.600 en 1999. En respuesta a la presión internacional, los talibán prohibieron el cultivo de adormidera en julio de 2000, pero anularon esta prohibición después de los ataques estadounidenses en el mes de octubre. También se ha establecido una tasa del 25% ciento para el transporte de madera a Pakistán. La oposición de la Alianza del Norte dependía principalmente de unos ingresos de 60 millones de dólares anuales por la venta de esmeraldas y lapislázuli (piedra semipreciosa de color azul intenso).
Camboya – zafiros, rubíes, madera	Al cesar la ayuda de China en 1989, los rebeldes «jeme-res rojos» pasaron al saqueo de recursos para financiar sus operaciones. Hacia la mitad de los años noventa, la concesión de licencias de minería y tala a empresas tailandesas en su territorio les proporcionó unas ganancias de entre 120 y 240 millones de dólares al año. El agotamiento de las gemas y las restricciones tailandesas sobre el comercio de madera causaron un fuerte descenso de los ingresos después de 1995, debilitando seriamente a este grupo. A mediados de los años noventa, el gobierno de Camboya ingresó unos 100 millones de dólares anuales gracias a acuerdos secretos e ilícitos que permitieron a madereros vietnamitas el acceso a las concesiones. Pero la extensión de la deforestación recortó las ganancias a 20 millones de dólares.

Nota: Los casos que se discuten detalladamente en este capítulo (Angola, Sierra Leona, República Democrática del Congo, Indonesia y Papúa Nueva Guinea) no están incluidos en esta lista.

Fuente: Ver nota final N° 3.





secuencia, no pueden financiar las hostilidades por sí mismos. Debido a las restricciones de espacio, el capítulo tampoco se refiere a los conflictos derivados del agotamiento de recursos y la degradación de los sistemas naturales.

Los ejemplos que se estudian son, todos, conflictos «civiles» en los que la violencia tiene lugar dentro de un país determinado, aunque hay importantes conexiones globales a través del mercado mundial de recursos ilegales y suministro de armas, y en ocasiones afectan a los países vecinos. Durante los años venideros probablemente crecerá la amenaza de guerras por los recursos a través de las fronteras. Un reciente estudio del profesor Michael Klare, del Hampshire College, recalca que mientras la demanda de combustibles, minerales, agua y otros artículos primarios continúe creciendo a un ritmo medioambientalmente insostenible, las disputas por la propiedad se multiplicarán y la escasez incrementará la probabilidad de que las potencias industriales intervengan para asegurar «sus» suministros de materias primas.⁵

Anatomía de los conflictos por recursos

En contraste con la era de la Guerra Fría, los conflictos de hoy se deben menos a ideologías y más a la lucha por controlar o saquear recursos; sus objetivos se centran menos en tomar el control del Estado y más en controlar territorios ricos en minerales, madera y otros artículos de valor, o las rutas que siguen de camino a los mercados. Aunque algunos conflictos actuales tienen sus raíces en antiguas rencillas o antagonismos, las circunstancias han alterado su dinámica y les han dado un poderoso impulso propio: un círculo vicioso en el que el botín de la explotación de recursos financia la guerra y ésta permite mantener el control sobre los mismos.

El final de la rivalidad de la Guerra Fría significó el final de mucha de la ayuda que entonces prestaban las dos superpotencias a sus aliados en el Tercer Mundo —gobiernos o rebeldes—. Aunque los financiadores externos (sean gobiernos o ciudadanos que viven fuera del país) no han desaparecido del todo, las facciones en guerra dependen cada vez más de medios criminales como la extorsión, pillaje, toma de rehenes, monopolio del comercio, tráfico de drogas, explotación laboral y confiscación de ayuda humanitaria cerca de sus fronteras.⁶



Pero, posiblemente, las fuentes más importantes de ingresos son la extracción ilícita y el comercio de los recursos naturales. Paul Collier, director del Grupo de Investigación sobre el Desarrollo del Banco Mundial, sugiere que la codicia y la disponibilidad de riqueza en recursos naturales «saqueables» son factores clave. Se requiere la presencia de materias primas que puedan ser capturadas por los grupos armados, o sobre las que puedan imponer tasas o impuestos. Collier sobrevalora la importancia de la codicia y minimiza otros factores como el resentimiento, y su trabajo subraya que «algunos países son más proclives al conflicto que otros, sencillamente porque ofrecen posibilidades económicas más atractivas para la rebelión».⁷

La mayor parte de los conflictos basados en recursos no se desarrollan como las guerras tradicionales. Las grandes batallas entre bandos enemigos generalmente se evitan porque el objetivo es mantener las condiciones que permiten el saqueo. De hecho, se sabe que diferentes facciones armadas han participado en ataques simulados contra grupos opositores, les han vendido armas y suministros o han colaborado de otras maneras. El objetivo común es facilitar el saqueo y perpetuar las condiciones que permiten actividades que, de otro modo, serían interpretadas sencillamente como delictivas.⁸

La carga de la violencia se dirige contra los civiles. Dado que la clave es establecer un control indiscutible sobre los recursos, los grupos armados intentan intimidar a la población local hasta la sumisión o utilizan el terror para expulsarla. «De ahí la importancia de la atrocidad extrema y manifiesta», observa Mary Kaldor, de la Universidad de Sussex, como la expulsión directa de población, dejar un área inhabitable por la colocación indiscriminada de minas, vender casas y hospitales, amputar extremidades, imponer largos sitios y bloqueos para provocar hambrunas y aplicar la violencia sexual sistemática. A diferencia de los movimientos rebeldes con base ideológica, los que persiguen la riqueza de los recursos no compiten por «los corazones y las mentes» de la población local. Los chicos jóvenes son, a menudo, convertidos en niños-soldado, y las chicas en esclavas sexuales para los luchadores. Muchos combatientes son obligados a cometer atrocidades, a menudo contra sus propias familias, con la intención de traumatizarlos y extender un sentimiento de complicidad que evitará que más adelante sean aceptados en sus comunidades.⁹

Las acciones habitualmente descritas como caos, colapso y violencia sin sentido en los reportajes de los medios de comunicación



tienen en realidad cierta lógica, aunque perversa. David Keen, profesor de la London School of Economics, argumenta que la violencia sirve a una función económica, al mantener una economía de guerra que beneficia a ciertos grupos: funcionarios del gobierno, «señores de la guerra», combatientes, traficantes de armas, empresarios y comerciantes sin escrúpulos. Aquellos que se beneficián de este violento «modo de acumulación» obtienen beneficios, poder y estatus, aun cuando esto significa, a la larga, empobrecimiento, vidas rotas y muerte para la sociedad. Los grupos que viven a costa de un recurso lucrativo tienen mayor interés en prolongar el conflicto que en zanjarlo, porque les permite mantener su posición privilegiada y confiere casi-legitimidad a sus actos.¹⁰

El cebo de la riqueza fácil a través de la explotación ilegal de recursos también da lugar a la proliferación de grupos rivales despiadados y bien armados que, a menudo, profundizan la ilegalidad y prolongan la violencia. Las implicaciones para aquellos en la comunidad internacional que buscan acabar con este tipo de conflicto son complejas. Puede ser posible conseguir algún alto el fuego o incluso acuerdos de paz, pero estos parecen ser respetados sólo mientras se ajusten a los intereses de los grupos armados. Alcanzar una paz duradera requerirá una implicación sustancial y de largo plazo por parte de la comunidad internacional.¹¹

¿Por qué algunos países son proclives a los conflictos por recursos? Aunque la existencia de recursos naturales y la posibilidad de saquearlos son factores clave, no son suficientes. Muchos países ricos en recursos no han caído en la violencia. Otros factores —políticos, sociales, económicos y militares— surgen en Estados débiles y economías vulnerables.

La abundancia de recursos puede tener, en realidad, consecuencias económicas negativas, ya que los países crecen dependiendo demasiado de ellos y asignan poco capital y mano de obra a otros sectores como la agricultura, industria y servicios. El resultado es un fracaso a la hora de diversificar la economía, estimular energías innovadoras y desarrollar las aptitudes humanas. Y la volatilidad de los precios de estas mercancías en el mercado mundial puede dar lugar a distorsionados ciclos de alzas y quiebras.

Algunos investigadores opinan que las sociedades cuyos ingresos principales derivan de *royalties* procedentes de recursos, en lugar de la generación de valor añadido, son propensas a desarrollar una cultura con una corrupción muy extendida, creciente brecha entre ricos y pobres e instituciones del Estado que no funcionan



y no cumplen su papel de servicio público. Las industrias de extracción de recursos tienden a reproducir características de enclave, es decir, tienen pocas conexiones con el resto de la economía local, especialmente si los recursos se exportan sin ningún tipo de procesamiento. A menudo los enclaves están también alejados físicamente, ya que los yacimientos minerales o las zonas de tala suelen estar en áreas muy remotas. Los beneficios para la economía general son, en consecuencia, muy limitados.¹²

Otro factor es la pobre administración de muchos países que, en algunos casos, ha llevado a lo que William Reno, de la Northwestern University, llama «Estados en la sombra»: una situación en la que reinan la corrupción y el clientelismo, los servicios y bienes públicos son restringidos y no son accesibles a muchas personas y las instituciones del Estado (como la administración pública, las universidades o el banco central) se debilitan para frustrar a los posibles contrincantes del dirigente de turno, mientras fuera de estas instituciones formales se crea una red paralela para beneficio de los líderes y sus aliados. Los ingresos del Estado se desvían para amasar inmensas fortunas ilícitas para los gobernantes y pagos a los financiadores clave del régimen. (El dictador de Zaire, Mobutu Sese Seko, fue sospechoso de haber amasado una fortuna ilegal estimada entre cuatro y seis mil millones de dólares, una cifra superior a la producción económica anual del país.)¹³

Los gobernantes de los «Estados en la sombra» a menudo promueven y manipulan conflictos entre diferentes comunidades, facciones y grupos étnicos como medio para mantener el control. Sin embargo, gobernar de esta forma intensifica los roces dentro de la sociedad. En estas condiciones, los grupos descontentos u ofendidos tienden cada vez más a la protesta e incluso a la violencia, surgen rivales que desafían el desacreditado liderazgo y políticos despiadados o empresarios sin escrúpulos, que ven una oportunidad para el pillaje de recursos y utilizan la violencia para conseguir sus objetivos.¹⁴

Muchos países en vías de desarrollo, particularmente en África subsahariana, ven cómo las fuerzas del gobierno se deterioran mientras están en auge las formaciones de seguridad privadas, incluyendo unidades paramilitares, grupos de autodefensa de ciudadanos, fuerzas subvencionadas por corporaciones multinacionales, mercenarios extranjeros y bandas criminales. De hecho, cada vez resulta más difícil hacer distinciones claras entre fuerzas de seguridad legítimas o ilegítimas, públicas o privadas.



Esto ocurre por diversas razones. Sin la financiación de la Guerra Fría y bajo una creciente presión de los donantes occidentales para reducir el tamaño de las estructuras estatales, muchos gobiernos no pueden mantener por más tiempo grandes ejércitos. No se paga a los soldados o se les paga menos de lo acordado y éstos, a menudo, buscan otras formas de financiación, incluyendo el saqueo y la extorsión. Algunos comandantes militares se convierten, de hecho, en «señores de la guerra». Esta fragmentación es incluso más probable donde los gobernantes han creado deliberadamente fuerzas de seguridad rivales que se vigilan unas a otras para prevenir cualquier desafío serio al control central.¹⁵

Durante los años noventa cobraron notoriedad diversas empresas privadas de mercenarios. Compañías como Executive Outcomes (ahora desaparecida), Sandline International, Defense Systems Ltd y Ghurka Security Guards atrajeron a personal militar de los ejércitos del antiguo Pacto de Varsovia que perdieron su trabajo con el final de la Guerra Fría, así como a veteranos de la era del *apartheid* en Suráfrica. Ofrecen un abanico de «servicios» que incluyen entrenamiento y consultoría, protección de instalaciones, suministro o comercio de armas y operaciones de combate. Empresas y gobiernos de todo el mundo los han contratado. Algunos gobiernos asediados, incluidos los de Angola, Sierra Leona y Papúa Nueva Guinea, acudieron a ellos para que les ayudaran a combatir a los grupos rebeldes, pagándoles con ingresos derivados de los recursos naturales o, en algunos casos, concediéndoles —a ellos o a empresas filiales— acceso a diamantes y otros recursos.¹⁶

Las multinacionales petroleras o mineras suelen confiar en fuerzas privadas de seguridad para proteger sus operaciones e instalaciones. En algunos casos, como Occidental Petroleum en Colombia, Shell en Nigeria, Talisman Energy en Sudán y ExxonMobil y Freeport McMoran en Indonesia, han subsidiado o ayudado a entrenar y armar a fuerzas de seguridad o han puesto a su disposición equipamiento e instalaciones. Estas unidades han estado involucradas en serias violaciones de los derechos humanos.¹⁷

La proliferación masiva de armas de mano o ligeras juega un papel clave. Los conflictos basados en recursos se libran principalmente con este tipo de armas porque son baratas, fáciles de conseguir, ocultar y pasar de contrabando, y sencillas de usar y mantener. Su uso no requiere complejos preparativos logísticos. Una estimación básica de la producción global de armas de mano sugiere que unos seis millones de pistolas, revólveres, rifles, metra-



lletas y ametralladoras fueron fabricados cada año durante las dos últimas décadas. Por todo ello se cree que existen, al menos, 550 millones de armas de fuego en el mundo. Tan sólo durante el año 2000, se estima que se fabricaron al menos 15.000 millones de cartuchos de munición. La imagen que surge, a pesar de la incertidumbre que rodea a los datos, es la de un mundo excesivamente bien equipado con instrumentos de muerte y terror.¹⁸

Dado que muchas actividades en el marco de los conflictos por recursos son ilícitas por naturaleza y conllevan actos de cuestionable legitimidad, los movimientos de mercado gris y negro tienen una importancia especial. El tráfico de armas está vinculado estrechamente al comercio ilegal de materias primas como minerales, madera y diamantes. Las rutas por las que armas y mercancías viajan en sentidos opuestos suelen ser las mismas. Los ingresos obtenidos al vender las materias primas financian la compra de armas, munición, equipamiento militar, uniformes y otros artículos. A veces las armas se canjean directamente por recursos naturales, drogas, productos animales y otros.¹⁹

Los conflictos por recursos en lugares como Kono, Aceh y Bentai parecen completamente alejados de los centros comerciales del mundo occidental. Pero los recursos sobre los que se derrama tanta sangre tienen como destinatarios a los consumidores de los países más ricos, al margen de lo complejas o tortuosas que sean las formas de envío. Para los consumidores, esta conexión es más fácil de captar en el caso de los diamantes, un producto muy visible y comercializado. En otros como el petróleo, madera, cobre y coltán, la conexión es más difícil de ver porque pasan por procesos de elaboración antes de llegar a los complejos productos finales (Ver Cuadro 7-1). Pero una parte de los teléfonos móviles del mundo occidental, de los muebles de caoba y de las cadenas de oro llevan la impronta invisible de la violencia.²⁰

Es la fuerte demanda de las mercancías y de los productos de consumo elaborados a partir de ellas lo que hace tan lucrativa la explotación ilegal de recursos. La expansión del mercado global y el crecimiento del comercio y redes financieras asociadas han hecho relativamente fácil para los grupos armados el acceso a mercados clave. Tienen pocas dificultades para establecer redes internacionales de contrabando, ya sea por falta de atención o por un grado de complicidad entre los comerciantes, fabricantes y redes financieras internacionales, así como gracias a controles poco estrictos en los países consumidores.²¹



Cuadro 7-1
La conexión coltán

Pocos usuarios de teléfonos móviles saben que sus artilugios tecnológicos pueden vincularles a una de las más cruentas guerras contemporáneas: el conflicto de la República Democrática del Congo. El coltán —abreviatura de columbita-tantalita— es una de las materias primas por las que han luchado las facciones en guerra. Con la apariencia de un barro negro y arenoso, el coltán es un sedimento que contiene tantalio, material altamente resistente al calor. El tantalio es crucial para la fabricación de condensadores, pequeños componentes que regulan el flujo de corriente por las placas de circuitos y ayudan a hacer girar el mundo moderno. Un periodista lo explicó así: «el tantalio es el polvo mágico de la industria de alta tecnología». Más de la mitad del suministro mundial se utiliza en la industria electrónica para productos como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y «buscapersonas», pero también se utiliza en la industria aeroespacial, en defensa y en las industrias químicas, farmacéuticas, médicas y automovilísticas.

El suministro mundial de tantalio está entre 3.000-3.500 toneladas al año. Quizá tres cuartas partes de esta cantidad proceden de extracciones legales en Australia, Canadá y Brasil. Pero la RDC, que ocupa el cuarto lugar en reservas de coltán, también es un proveedor importante. Las tropas ruandesas y sus aliados rebeldes —Rally for Congolese Democracy (RCD)— tomaron el control de entre 1.000 y 1.500 toneladas de reservas de coltán entre 1998-1999, expulsando a los campesinos congoleños de sus tierras ricas en este mineral, mientras sus prisioneros ruandeses cavaban en busca de coltán a cambio de sentencias más leves.

En el año 2000, la boyante demanda de tantalio por parte de la industria de alta tecnología generó una escasez temporal en todo el mundo. Los precios subieron de menos de 20 dólares por libra en 1998 a más de 200 dólares, por lo que la explotación de coltán se convirtió en un negocio muy lucrativo para las partes en guerra y para mineros individuales. A finales de 2000, los rebeldes del RCD afirmaron que estaban produciendo entre 100 y 200 toneladas de coltán mensualmente, lo que proporcionaba a este grupo mayores ganancias que sus actividades de extracción de diamantes. En 2001 los precios experimentaron un fuerte descenso como respuesta a la caída en las ventas de teléfonos móviles, amortiguando así la extracción ilegal en el este de la RDC. Pero los depósitos de coltán mantienen su atractivo: la promesa de una vida mejor, en un país donde la mayoría de los ingresos se mide en unos pocos céntimos al día.

Fuente: Ver nota final N° 20.



Algunas importantes empresas internacionales, de hecho, han ayudado a perpetuar los conflictos basados en recursos:

- Comprando mercancías a los combatientes, como hizo De Beers hasta hace poco, comprando diamantes procedentes de áreas de conflicto.
- Proporcionando ingresos a los gobiernos que están en guerra, como las petroleras Chevron y Elf han hecho en Angola.
- Facilitando el envío ilícito de materias primas, como el transporte aéreo de coltán por parte de Sabena, desde el Congo ocupado a Europa.
- Operando en países con gobiernos ilegítimos o represivos, como ExxonMobil y Freeport McMoran en Indonesia, Shell en Nigeria, Talisman Energy y otros en Sudán y Occidental en Colombia.

Estas prácticas empresariales no constituyen todas, necesariamente, fechorías. Por ejemplo, las compañías petroleras en Angola tienen contrato con un gobierno reconocido. Pero su presencia juega un papel decisivo en situaciones donde la mayoría de la población sufre violencia y privaciones.²²

Cómo se financian los conflictos con el pillaje de los recursos naturales

Una campaña contra los «diamantes sangrientos» lanzada por grupos civiles ha destacado el hecho de que varios conflictos violentos en países en vías de desarrollo son financiados con la venta de brillantes, asociados con la idea del amor y la dedicación personal gracias al duro trabajo de los publicistas. Los diamantes y otras mercancías han resultado de especial relevancia en tres conflictos: Sierra Leona, República Democrática del Congo y Angola.

Es difícil saber qué parte de los recursos procede de zonas en guerra. En el caso de los diamantes, el gigante De Beers estima que, en 1999, los diamantes sangrientos sumaban el 4% de la producción bruta de diamantes en el mundo, que ascendía a 6.800 millones de dólares. Otras estimaciones elevan ese porcentaje hasta el 10-20%. Aparte de los diamantes de conflicto, hay también una cantidad importante de diamantes ilícitos, que han sido extraídos de forma ilegal o robados pero no desde áreas de conflic-



to. Como ambas clases dependen del mercado gris y negro, es extremadamente difícil distinguirlos. Un grupo de expertos de la ONU estimó que alrededor del 20% del comercio global de diamantes en bruto es de naturaleza ilícita.²³

Los diamantes jugaron un papel central en el conflicto que devastó Sierra Leona durante los noventa. Ibrahim Kamara, embajador de la ONU en Sierra Leona, dijo en julio de 2000: «Nosotros siempre hemos mantenido que el conflicto no es por ideología o diferencias regionales o tribales... Las raíces del conflicto son y serán los diamantes, los diamantes y los diamantes».²⁴

Ya antes de los noventa, la corrupción, el amiguismo y la extracción ilegal habían despilfarrado la riqueza de diamantes del país, hasta el punto de que pocos servicios gubernamentales funcionaban y las oportunidades educativas y económicas eran escasas y de difícil acceso. Sierra Leona se convirtió en el modelo de «Estado en la sombra». La presión de las instituciones financieras internacionales hacia la austeridad financiera y la racionalización de gastos en la plantilla del gobierno sólo consiguió empeorar la situación. El Comité Internacional de Rescate asegura que un tercio de todos los bebés del distrito de Kenema, rico en diamantes, muere antes de cumplir un año. El PNUD situó a Sierra Leona en la última posición en su Índice de Desarrollo Humano.²⁵

A lo largo de los años noventa, Sierra Leona sufrió rebelión, bandidaje, golpes de Estado e intentos de golpe de Estado y el movimiento de fortunas que varían en función de las batallas (Ver Tabla 7-2). En marzo de 1991, el Frente Revolucionario Unido (RUF) invadió Sierra Leona desde Liberia, con un fuerte apoyo del entonces caudillo y ahora presidente liberiano Charles Taylor, y tomó el control de los campos de diamantes de Kono. Las filas del RUF incluían a jóvenes desmotivados de los barrios bajos, mineros ilícitos de diamantes, mercenarios de Liberia y Burkina Faso y otros dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad para el pillaje y la violencia. Muchos otros fueron secuestrados y forzados a cometer atrocidades, incluyendo un gran número de niños. Aunque el RUF proclamaba que su motivación eran agravios no resueltos, su principal objetivo era tomar el control de la riqueza mineral del país. La rebelión se caracterizó por el bandidaje y la brutalidad. Acabó con más de 75.000 vidas, convirtió a medio millón de personas en refugiadas y desplazó a la mitad de la población, de 4,5 millones de personas.²⁶



Enfrentado a la rebelión del RUF, el gobierno aumentó sus fuerzas armadas de 3.000 a 14.000 efectivos. Este ejército indisciplinado, ineficaz y harapiento congregó a soldados mal entrenados, milicias de la vecina Liberia, matones urbanos y niños de la calle involucrados en pequeños hurtos. Mary Kaldor comenta que «se les dio un AK-47 y una oportunidad de participar en robos a mayor escala». Los soldados del gobierno, a menudo, engordaban sus escasos sueldos con los saqueos y la minería ilegal.²⁷

En ocasiones las fuerzas rebeldes y el ejército han colaborado entre sí. A veces, quienes eran soldados durante el día se convertían en rebeldes por la noche. Esta cooperación entre supuestos adversarios culminó en mayo de 1997, cuando los descontentos soldados protagonizaron un golpe de Estado contra un gobierno que había sido elegido unos meses antes e invitaron al RUF a unirse a la nueva junta. La perspectiva de la paz fue vista como una amenaza inaceptable para su sistema de explotación criminal.²⁸

Sierra Leona es un productor de diamantes relativamente pequeño, pero gran parte de sus gemas es de calidad muy alta y, en consecuencia, son muy solicitadas. El RUF adquirió armas y se financió a través del control de los campos de diamantes, pero la riqueza de los diamantes ha sido una constante fuente de roces internos. Al principio los combatientes del RUF hacían el trabajo de minería ellos mismos; más tarde el grupo empezó a depender más de los trabajos forzados, incluso de niños. Se cree que sus ingresos anuales están entre 25 y 125 millones de dólares, aunque algunas estimaciones son considerablemente mayores.²⁹

Los diamantes del RUF entran en el mercado internacional disfrazados como liberianos, guineanos o gambianos. Un grupo de investigación de la ONU informó en diciembre de 2000 de que había encontrado «inequívocas y sobrecogedoras evidencias de que Liberia ha estado apoyando activamente al RUF a todos los niveles, suministrando entrenamiento, armas y material relacionado, apoyo logístico, un escenario desde el que lanzar los ataques y un refugio seguro para la retirada y recuperación, así como actividades de relaciones públicas». Bajo el mando de Charles Taylor, Liberia se ha convertido en un gran centro de contrabando de diamantes y armas, tráfico de drogas y blanqueo de dinero.³⁰

Taylor ha tomado el control exclusivo sobre los recursos naturales de Liberia y está empleando los beneficios de la exportación de madera para ayudar al RUF en Sierra Leona. Como las sanciones internacionales lograron frenar el comercio de diamantes de



Tabla 7-2. Acontecimientos clave en la guerra civil de Sierra Leona

Año	Acontecimiento
1991-95	El RUF invade Sierra Leona, desencadenando una guerra civil que involucra a tropas gubernamentales, milicias de defensa civil, varias empresas privadas de mercenarios y fuerzas nigerianas. El RUF controla las áreas ricas en diamantes. El ejército se divide en facciones. La empresa militar privada Executive Outcomes (que recibe su pago al contado con los beneficios de los diamantes) hace retroceder al RUF.
1996	De las elecciones del mes de marzo sale vencedor Ahmad Tejan Kabbah; el nuevo gobierno firma un acuerdo de paz con el RUF en noviembre, que reclama el desarme, la desmovilización y la retirada de las fuerzas extranjeras.
1997	En mayo, Kabbah es derrocado por el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas (AFRC, una facción descontenta del ejército). El AFRC invita al RUF a unirse a su régimen en junio; el resultado son asesinatos sistemáticos, torturas, violaciones y saqueos. En octubre, Naciones Unidas impone un embargo de armas.
Marzo de 1998	Tropas nigerianas ayudadas por Sandline, una empresa privada de mercenarios, expulsan a la coalición AFRC/RUF de la capital, Freetown. Kabbah retoma el poder. En el mes de junio, Naciones Unidas limita el embargo de armas a las fuerzas no gubernamentales.
Final de 1998	El RUF recupera el control de las zonas de diamantes y ataca Freetown; se producen violaciones masivas de los derechos humanos.
1999	Se firma el Acuerdo de Paz de Lomé (que implica una amnistía y puestos en el gobierno para los líde-

270



res del RUF y AFRC); Nigeria comienza a retirar sus tropas; el Consejo de Seguridad de la ONU crea la fuerza pacificadora UNAMSIL, pero es una pacificación inadecuada y poco ambiciosa (lenta llegada de tropas mal equipadas y apenas entrenadas).

- Mayo de 2000 El RUF toma como rehenes a varios cientos de soldados de las tropas de UNAMSIL; se reanudan las luchas a gran escala; intervienen tropas británicas; el líder del RUF, Foday Sankoh, es capturado.
- Julio de 2000 La ONU impone un embargo sobre los diamantes sin certificado gubernamental.
- Noviembre de 2000 Se firma un alto el fuego entre el gobierno y el RUF; el alto el fuego se cumple en gran medida, pero la situación sigue siendo inestable.
- Marzo de 2001 El Consejo de Seguridad de la ONU amenaza con sanciones a Liberia a menos que demuestre que no apoya al RUF.
- Julio de 2001 El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba los planes para crear un tribunal de crímenes de guerra, pero el presupuesto inicial se recorta a la mitad. El gobierno, la ONU y el RUF acuerdan prohibir la extracción de diamantes en el distrito de Kono.
- Otoño de 2001 El RUF continúa con la extracción de diamantes, violando la prohibición y recurriendo a trabajos forzados; 15.000 pacificadores de la ONU mantienen el alto el fuego, pero la vigilancia sobre la prohibición de extraer diamantes no forma parte de su mandato. Unos 16.000 combatientes del RUF y de la milicia son desarmados, pero la falta de fondos obstaculiza la reintegración de los combatientes y el RUF retiene las armas y su estructura militar.

Fuente: Ver nota final N° 26.



conflicto, la importancia de los ingresos de la madera va en aumento. Taylor recibe pagos extraoficiales de un pequeño número de compañías madereras que, a cambio, tienen privilegios especiales, y que están involucradas en el contrabando de armas. Una es Exotic Tropical Timber, dirigida por el traficante de armas y diamantes ucraniano Leonid Minin, arrestado en Italia en julio de 2001 por tráfico de armas. Pero el jugador clave en el comercio ilegal de madera parece ser Oriental Timber Co (OTC). Esta compañía tiene el control sobre cerca del 43% de los bosques de Liberia y ha estado implicada en el tráfico de armas al RUF a través de sus rutas madereras.³¹

Liberia todavía conserva una parte considerable de sus selvas y una gran riqueza en plantas y especies animales, incluyendo elefantes y el hipopótamo pigmeo, una especie en peligro. Pero la magnitud del comercio de madera es tal que sus bosques, probablemente, estarán desnudos en poco más de una década. Según los planes actuales el ritmo, en realidad, puede ser aún mayor. La OTC no sólo ha utilizado codiciosos métodos de rapiña, también ha demolido casas y aldeas enteras sin compensación alguna y sin apenas aviso previo. La gestión forestal y los esfuerzos por reforestar son virtualmente inexistentes.³²

El grupo de expertos de la ONU también encontró evidencias concluyentes de que Burkina Faso es un paso clave en los envíos de armas ligeras al RUF y a Liberia. Además se han transferido armas a través de Senegal, Gambia y Guinea. Y Costa de Marfil ha apoyado directamente al RUF. En ocasiones las armas, procedentes sobre todo de Libia, Ucrania, Eslovaquia y Bulgaria, eran enviadas con la ayuda de compañías occidentales de transporte aéreo.³³

El pillaje de los recursos ha sido también un factor clave en el conflicto de la República Democrática del Congo, una guerra que ha matado a 1,7 millones de personas y desplazado a otros 1,8 millones. En agosto de 1998, tropas de Uganda y Ruanda invadieron el país, ayudando a los grupos rebeldes que intentaban derrocar al gobierno de Laurent Kabila. Angola, Zimbabue y Namibia enviaron tropas en ayuda de Kabila. Según algunas estimaciones, más de 100.000 soldados extranjeros han estado involucrados en el Congo. Muchas de las fuerzas que intervenían querían acabar con sus propios grupos rebeldes, que operaban desde suelo congoleño. Ruanda, en particular, era consciente de que los restos de las milicias hutu *Interahamwe*, protagonistas del ge-



nocidio contra los tutsis en 1994, estaban usando la RDC como una base para sus ataques a Ruanda.³⁴

Además de los factores políticos y militares, un poderoso acicate para el conflicto fue la oportunidad de saquear la inmensa riqueza en recursos de la RDC, en el contexto de una autoridad central débil e incapaz de hacer cumplir la ley. La República Democrática del Congo es extremadamente rica en minerales, gemas y materias primas agrícolas: diamantes, oro, coltán, niobio, casiterita, cobre, cobalto, zinc, manganeso, madera, café, té y aceite de palma. La vida salvaje del país, que incluye okapis, gorilas y elefantes, atrae a los cazadores furtivos, en el último caso por el marfil. Los perdedores han sido la gran mayoría de la población y el entorno natural (Ver Cuadro 7-2).³⁵

Al principio las fuerzas invasoras y sus aliados recurrieron al saqueo abierto de las materias primas almacenadas; más adelante organizaron una variedad de métodos para extraer recursos adicionales. Los soldados individuales trabajan para su beneficio o el de su comandante, y la población congoleña ha sido puesta a trabajar por las fuerzas de Uganda y Ruanda. Los mineros locales fueron obligados a renunciar a algunos de sus hallazgos (por la fuerza o mediante la extorsión). Ciudadanos extranjeros, incluyendo prisioneros ruandeses, han trabajado para beneficio del ejército de Ruanda o del comandante. Se otorgaron concesiones a compañías de dudosa reputación y se utilizaba mano de obra infantil en la minería de oro y diamantes. Las fuerzas ocupantes y sus aliados también han forzado a los cultivadores de tabaco y los productores de aceite de palma a vender sus mercancías a precios ridículos.³⁶

El conflicto ha permitido a Ruanda y Uganda convertirse en grandes exportadores de materias primas que no poseen o que sólo tienen en cantidades limitadas. Estos recursos saqueados se han convertido en una fuente de divisas extraordinaria. Uganda, por ejemplo, esta reexportando oro, diamantes, casiterita, coltán, café, té, madera, colmillos de elefante y plantas medicinales. Actualmente exporta diez veces más oro que hace cinco años. El pillaje de los recursos también ha permitido a ambos países financiar su presencia militar. Ruanda incluso ha establecido un sistema extra-presupuestario a este efecto. En el caso de Uganda, lo fundamental parece ser el enriquecimiento individual de altos mandos militares y hombres de negocios, incluyendo a Salim Saleh, hermano del presidente Yoweri Museveni, y a James Kazini, antiguo jefe del ejército.³⁷





Cuadro 7-2
El impacto medioambiental del conflicto
por recursos en la República Democrática del Congo

Un grupo de expertos de Naciones Unidas sobre la explotación ilegal de recursos en la RDC descubrió que las poblaciones de okapis, gorilas y elefantes habían mermado considerablemente en diversos parques nacionales. En primer lugar, en 1994 se produjo la entrada de más de un millón de refugiados procedentes de Ruanda, que originó una amplia deforestación y caza furtiva. En 1998 se les unieron las tropas de Ruanda y Uganda y sus aliados congoleños, rebeldes contra el régimen de Kabila. La promesa de ricos depósitos de coltán y otros recursos ha atraído, además, a unos 10.000 mineros al Parque Nacional de Kahuzi-Biega y la Reserva de Okapis; ambos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero la seria degradación del medio ambiente ha colocado a estos parques en la lista de lugares en peligro. La caza furtiva de colmillos de elefantes, que viola un tratado internacional, dejó sólo dos familias de elefantes, de las 350 que habitaban en Kahuzi-Biega en 2000. Además, el número de gorilas en las tierras bajas del este ha caído tan bajo que están amenazados de extinción.

Los mineros arrancan la corteza de los árboles eko para fabricar los canales donde lavan el barro que contiene coltán; se han destruido miles de árboles, minando así el sustento de los indígenas locales, los mbuti, que los usan para recolectar miel.

Algunas compañías de explotación forestal relacionadas con los rebeldes han realizado operaciones devastadoras de tala masiva en los bosques. La solicitud de licencia de DARA-Forest Co., por ejemplo, fue rechazada a principios de 1998; sin embargo en 2000 obtuvo una concesión en la Provincia Oriental que le concedió el RCD-ML, un grupo rebelde aliado con Uganda. Seguidamente llevó a cabo una deforestación «sin consideración alguna de las reglas mínimas aceptables de explotación maderera para una gestión forestal sostenible», según informa el grupo de trabajo de la ONU. A pesar de que DARA-Forest no cumplió con los procedimientos del Consejo de Asistencia Forestal y, además, eludió los requisitos internacionales para la certificación, el grupo de trabajo de la ONU descubrió que diversas compañías de Bélgica, Dinamarca, Suiza, China, Japón, Kenia y Estados Unidos han importado la madera de esta compañía vía Uganda.

Fuente: Ver nota final N° 35.



El propio gobierno de la RDC ha utilizado sus recursos como pago en especie para comprar armas. Por ejemplo, una compañía china fue incorporada a una empresa mixta minera como parte de un acuerdo para asegurar el equipamiento militar procedente de este país. Y aunque la motivación de los países que intervienen en ayuda del gobierno parece ser principalmente política y estratégica, la RDC ha utilizado su riqueza en recursos como incentivo para que sus aliados se mantengan involucrados. El gobierno ha otorgado diversas concesiones, incluyendo pozos de petróleo en alta mar a Angola, diamantes y cobalto a Zimbabue y una parte de una mina de diamantes a Namibia. Ridgepoint, una firma de Zimbabue cuyos directivos incluyen al ministro de Justicia y a un sobrino del presidente Mugabe, se asoció con la compañía estatal congoleña Gécamines para explotar la minería de cobre. Zimbabue también recibía madera a cambio de su asistencia militar.³⁸

La responsabilidad del conflicto no sólo recae en los líderes regionales sino también en países más distantes, donantes internacionales y compañías privadas que consciente o inconscientemente han facilitado la explotación de los recursos congoleños al comprar y comercializar mercancías obtenidas de forma ilegal. Un grupo de expertos de la ONU apuntó a Mombasa (Kenia), Dar-es-Salaam (Tanzania) y Douala (Camerún) como los principales puertos utilizados. También enumeraba a 34 compañías con base en Europa Occidental, Canadá, Malaisia, India, Pakistán y Rusia como importadores de minerales congoleños ilícitos. Por último, el grupo criticaba al Banco Mundial por hacer la «vista gorda» ante la explotación ilegal de recursos. El personal del Banco evitaba cuestionarla o incluso defendía abiertamente el repentino aumento de las exportaciones de materias primas por parte de Uganda.³⁹

Incluso si los esfuerzos internacionales tienen éxito a la hora de establecer un alto el fuego duradero y una retirada de las tropas extranjeras, redes ilegales encabezadas por oficiales militares, empresarios y políticos sin escrúpulos continúan controlando grandes áreas de la RDC y las gestionan como feudos personales. Estas redes tienen gran interés en la continuación del conflicto como tapadera de sus actividades de saqueo.⁴⁰

La participación de Angola en la guerra de la RDC es el más reciente episodio en su propia historia de interminable conflicto. Desde su lucha por la independencia contra Portugal, entre 1961 y 1975, Angola ha permanecido en guerra salvo por cortos intervalos de tiempo. Al principio era la ayuda de las superpotencias



(y la intervención cubana y surafricana) la que mantenía la lucha entre el gobierno del Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) y los rebeldes de UNITA. Pero cuando las potencias exteriores retiraron paulatinamente la ayuda, a finales de los ochenta, ambos bandos volvieron sus miradas hacia los recursos naturales. Tres acuerdos de alto el fuego e intentos de pacificación fallaron, principalmente porque UNITA incumplía sus compromisos y volvía a la guerra.⁴¹

La riqueza de Angola en diamantes y petróleo (y en menor medida su oro, café, madera y vida salvaje) ha financiado la adquisición de armas, pero también ha servido para enriquecer a una pequeña elite en ambos bandos. Angola es el quinto productor mundial de diamantes en bruto y el segundo mayor productor de petróleo en África subsahariana. Los pozos de petróleo de alta mar han permanecido en manos del gobierno, pero el control sobre las minas de diamantes ha ido pasando de mano en mano. (A pesar de la feroz guerra, ha habido también alegaciones de que altos cargos del gobierno han proporcionado suministros militares a UNITA y han vendido diamantes en nombre de los rebeldes). Ambos bandos han logrado hipotecar los tesoros naturales del país en aras de un conflicto catastrófico que enturbia seriamente las posibilidades de las futuras generaciones.⁴²

UNITA recibió aproximadamente 3.700 millones de dólares por la venta de diamantes entre 1992-1998. A principios de los noventa controlaba cerca del 90% de las exportaciones de diamantes de Angola pero, tras sufrir algunas derrotas, su parte declinó hasta dos tercios entre 1996-1997. Sus beneficios se han reducido aún más a causa de la pérdida de territorios, el agotamiento de algunos yacimientos y el (limitado) impacto de las sanciones de la ONU. Se cree que UNITA vende actualmente alrededor de 80-150 millones de dólares en diamantes al año, muy por debajo de los 600 millones de hace una década. Con estos dólares compra armas, combustible y comida para las tropas, pero también los ha utilizado para ganar los favores de los líderes de Burkina Faso, Togo y el antiguo Zaire. Y una porción considerable de los ingresos, aparentemente, ha sido absorbida por la corrupción.⁴³

Algunos efectivos de UNITA participan en las excavaciones de diamantes, pero gran parte de la minería la llevan a cabo trabajadores esclavizados, privados de los derechos más básicos y trabajando en condiciones de alto riesgo. El grupo rebelde también impone un «impuesto», que pueden pagar en diamantes o en efec-



tivo, a los mineros que trabajan en territorios bajo su control y recibe «comisiones» de los compradores que allí operan.⁴⁴

Hasta 1999, cuando De Beers decidió dejar de comprar diamantes angoleños, UNITA tenía pocas dificultades para vender sus gemas. Durante años De Beers siguió una política de adquisición de diamantes del tipo «no hagas preguntas», y estaba más interesada en mantener el control del mercado que en el sufrimiento que los diamantes sangrientos ayudaban a perpetuar. Se cree que, entre 1996 y 1997, los diamantes angoleños constituían casi una quinta parte de los negocios de De Beers.⁴⁵

La diversidad de las rutas de contrabando ha permitido a UNITA, aparentemente, burlar el embargo de diamantes impuesto por la ONU. Burkina Faso, Zaire (hasta la caída de la dictadura de Mobutu) y Ruanda (desde 1998) han servido de refugio seguro para transacciones ilícitas. UNITA ha conseguido traficar con diamantes a través de Costa de Marfil, Marruecos, República Centroafricana, Namibia, Suráfrica y Zambia, con o sin el conocimiento de los gobiernos de estos países. El Ministerio de Minas de Zambia, por ejemplo, suministraba certificados de origen falsos. El origen de las gemas de UNITA quedaba aún más oculto al tallarlas, muy probablemente en Israel y Ucrania.⁴⁶

UNITA también fue capaz de evadir el embargo de armas de la ONU, confiando en diversos traficantes de armas y rutas de envío y asegurándose la complicidad de gobiernos que facilitaron certificados de usuario final falsos. El Zaire de Mobutu, Burkina Faso y Togo (desde 1996) fueron los principales conductos para las armas procedentes de Europa del Este; Zaire y Congo-Brazzaville también fueron utilizados para el almacenamiento; después de 1998, Ruanda permitió a UNITA mantener reuniones con traficantes de armas en su capital, Kigali. Las armas —en su mayoría armas de mano, aunque también se incluían artículos mayores como tanques y artillería— procedían principalmente de Bulgaria y otros países de Europa del Este.⁴⁷

Lo que los diamantes son para UNITA, lo es el petróleo para el gobierno angoleño. A un ritmo de dos o tres mil millones de dólares al año, los ingresos del petróleo significan el 90% de las exportaciones y una fracción similar del presupuesto del gobierno. El dinero del petróleo compra armas y sostiene la guerra: se destina casi tres veces más a la guerra que a programas sociales. Mientras tanto, una pequeña elite que rodea al presidente Eduardo dos Santos, y sus más altos generales, se embolsan beneficios conside-



rables a través de contratos corruptos de petróleo y armas, control del reparto de dispersas licencias de importación y cambio de divisas, y otros tratos financieros opacos. Para estos individuos, la guerra es lucrativa.⁴⁸

Muchas compañías petroleras del mundo, incluyendo a Chevron, Elf Aquitaine, BP y ExxonMobil, operan en Angola y están planificando grandes inversiones para expandir su presencia. Global Witness, una ONG británica, las acusa de ser cómplices en la perpetuación de la guerra porque proporcionan los recursos necesarios. Al parecer, parte de los casi 900 millones de dólares en «bonos nominativos» que se les exigieron para asegurar los derechos de exploración y producción de bloques ultra-profundos en alta mar a finales de los noventa fueron empleados en comprar armas. El consorcio de compañías que obtuvo dos de esos bloques, liderado por Elf y Exxon, incluye a empresas que han estado involucradas en el tráfico de armas.⁴⁹

Desde mediados de los ochenta, el gobierno angoleño ha recurrido a préstamos bancarios internacionales hipotecando la producción futura de petróleo. Gran parte del dinero de estos préstamos a alto interés ha financiado gastos militares. Una parte sustancial de los ingresos del petróleo fluye directamente a una cuenta de un banco extranjero para pagar el servicio de la deuda, en lugar de utilizarse para gastos sociales tremendamente necesarios. Con una parte significativa de los ingresos fuera del presupuesto formal del Estado (más de dos tercios en 1997), la rendición de cuentas es prácticamente inexistente y abundan las oportunidades para la corrupción.⁵⁰

Cómo la extracción de recursos desencadena el conflicto

En ocasiones, la extracción de recursos es en sí misma la fuente del conflicto. En todo el mundo las operaciones de compañías petroleras, mineras y madereras están provocando serias tensiones con las poblaciones locales, a menudo pueblos indígenas. Desde Colombia, Ecuador y Perú hasta Nigeria, Camerún, Indonesia y Papúa Nueva Guinea, se está creando el mismo escenario.

A menudo se confisca la tierra de poblaciones locales sin una compensación apropiada. Causan un amplio abanico de problemas medioambientales al envenenar el agua potable, destruir la tierra cultivable y perturbar zonas de caza y pesca. Y provocan trastor-



nos sociales porque llevan consigo importantes contingentes de obreros de la construcción, mineros y taladores. Los edificios y carreteras construidos en áreas antes inaccesibles pueden provocar condiciones de explosión urbana y atraer a más extraños. Los problemas y trastornos son muy reales pero los beneficios económicos de la extracción de recursos se los quedan, en su mayor parte, intrusos: el gobierno central, empresas multinacionales y multitud de inversores extranjeros. Cuando las comunidades afectadas se resisten, a menudo topan con una fuerte represión del gobierno.

Varios lugares de Indonesia son escenario de algunas de las más intensas luchas desencadenadas por recursos. En el extremo norte de Sumatra, Aceh ha sido testigo de una creciente violencia. Aceh es el emplazamiento de Arun, el mayor campo de gas de Indonesia y base de una inmensa planta de gas natural licuado (LNG). Operada por ExxonMobil y propiedad de la compañía estatal Pertamina, Arun genera el 30% de los ingresos del país por exportación de gas y petróleo, lo que supone cerca de 1.200 millones de dólares al año. Su instalación provocó resentimientos locales por varios motivos. La construcción, a finales de los años setenta, desplazó a varias aldeas y cientos de familias. Los escapes de gas y vertidos químicos han causado problemas de salud y medioambientales, devastando comunidades que dependían de la agricultura y la pesca. Los ingresos derivados de su instalación han alimentado una corrupción desenfrenada pero han ofrecido escasos beneficios a la población local, un tercio de la cual vive por debajo del límite oficial de la pobreza.⁵¹

Aceh también es rico en madera, minerales y tierra fértil, recursos que también eran explotados por los compinches de la dictadura de Suharto. Se expropiaron tierras que tradicionalmente eran propiedad de comunidades indígenas; la deforestación resultante del exceso de tala ha causado corrimientos de tierras e inundaciones y ha destruido hogares y arrozales. Los inmigrantes de Java, que llegaron a Aceh bajo el mandato de Suharto para establecer industrias de madera, pasta de papel y procesadoras también han sido una fuente de intenso resentimiento para los habitantes de Aceh.⁵²

El Movimiento por la Libertad de Aceh, conocido como GAM (Gerakan Aceh Merdeka), comenzó sus actividades en 1976, aunque su primer alzamiento fue aplastado con facilidad por el ejército. Una segunda rebelión a finales de los ochenta fue sofocada con arrestos, torturas y violaciones; se estima que más de un millar de civiles fueron asesinados por las Fuerzas Armadas. Desde



1989 a 1998 se impuso la ley marcial. La caída del régimen de Suharto permitió regresar a las guerrillas GAM, exiliadas y aumentar el apoyo popular a la independencia. Actualmente el GAM está bien equipado y financiado. La violencia ha matado a más de 5.000 personas, la mayoría civiles.⁵³

La guerrilla GAM siempre ha tenido como objetivo instalaciones militares y trabajadores javaneses, pero ExxonMobil se ha convertido ahora en un objetivo principal. La intensificación de los ataques forzó a la compañía a suspender sus operaciones de marzo a julio de 2001, lo que le costó al gobierno unos 100 millones de dólares mensuales en ingresos perdidos. Los militares respondieron con una operación contrarrevolucionaria que incluyó numerosas ejecuciones y desapariciones y llevó a miles de habitantes de Aceh a huir de sus hogares.⁵⁴

ExxonMobil ha intentado aparecer como un inocente testigo de la violencia, pero grupos no gubernamentales han acusado a la compañía de «complicidad silenciosa» en serios abusos militares. Se han descubierto varias fosas comunes con más de 5.000 cuerpos. ExxonMobil pagaba a los militares a cambio de seguridad en sus operaciones, y los informes aseguran que la compañía proporcionó equipamiento para cavar las fosas comunes y permitió a los militares utilizar sus instalaciones para torturas y otras actividades. La organización no gubernamental International Labor Rights Fund presentó un pleito contra la compañía en defensa de once lugareños de Aceh, alegando complicidad en asesinatos, tortura, secuestros y abusos sexuales por parte de soldados indonesios.⁵⁵

A unos 5.000 kilómetros al este, en la provincia indonesia de Irian Jaya (también conocida como Papúa Occidental), la riqueza en recursos ha contribuido a alimentar un conflicto que había comenzado antes. El área fue incorporada forzosamente a Indonesia en 1961; a mediados de los años sesenta nació un movimiento rebelde conocido como OPM (Organisasi Papua Merdeka, Organización por la Libertad de Papúa) que pedía el establecimiento de un Estado independiente. Pero este grupo no consiguió una ayuda cuantiosa hasta los setenta, cuando aprovechó el descontento contra una operación minera a gran escala.⁵⁶

Freeport McMoran Copper & Gold Inc., con base en EE UU, opera en la mina de Grasberg: es la mina de oro al aire libre más grande del mundo, aproximadamente del tamaño del estado de Vermont. Los beneficios de estas operaciones han sido la mayor fuente de ingresos por impuestos para Indonesia. Las tierras pro-



piEDAD de los pueblos indígenas amungme y kamoro, incluyendo una montaña sagrada, fueron ocupadas sin su consentimiento tras el acuerdo alcanzado en 1967 entre Freeport y el régimen de Suharto. No sólo se desplazó a muchas aldeas sino que los residuos de las minas se han vertido en territorios tribales corriente abajo. En 1998, por ejemplo, unas 200.000 toneladas de minerales se vertieron en el sistema fluvial del Ajkwa. Estas actuaciones han convertido 230 kilómetros cuadrados del delta del río en un páramo sin vida.⁵⁷

Desde el principio las comunidades locales se opusieron a la presencia de Freeport, pero esta oposición no se vinculó al separatismo armado de la OPM hasta 1977. Las fuerzas de seguridad indonesias tomaron represalias bombardeando y quemando aldeas. Pero los conflictos por la tierra, las demandas de compensaciones, violaciones de los derechos humanos y daños medioambientales siguieron desencadenando protestas violentas y no violentas. Igual que en Aceh, la migración de trabajadores javaneses a Papúa Occidental añadió más leña al fuego del conflicto. Freeport ha mantenido lazos cercanos con las Fuerzas Armadas. La compañía se apoya fuertemente en la protección militar y a cambio proporciona transporte, alojamiento y recursos a las tropas. Los informes financieros de la compañía demuestran que ha puesto a disposición del ejército más de nueve millones de dólares desde mediados de los noventa.⁵⁸

Desde 1998, los sentimientos pro independencia se han intensificado a causa de dos factores opuestos: la mayor libertad política de la era post-Suharto y la creciente represión militar de los movimientos separatistas. El movimiento ha crecido hasta convertirse en un movimiento general por la independencia de Papúa, integrado principalmente por civiles. Yakarta envió miles de tropas adicionales después de que el Congreso de Papúa declarara la independencia en junio de 2000. Se atacó a los civiles, se prohibieron las protestas pacíficas, se arrestó a los principales líderes y el acceso de periodistas y observadores fue severamente restringido. Los militantes de Papúa, a cambio, han atacado a fuerzas militares y a inmigrantes. Aunque la violencia es actualmente menos intensa que en Aceh, el recuento de muertes desde 1961 puede alcanzar las 100.000.⁵⁹

Tanto Papúa Occidental como Aceh están negociando sistemas de mayor autonomía, con los que se supone que recibirán una mayor proporción de los ingresos generados por los recursos: un



80% de los ingresos por minería e industrias forestales, 30% del gas natural y un 15% del petróleo. Pero puede que no sea suficiente para los rebeldes, y estas provincias son demasiado valiosas para Yakarta como para concederles una independencia plena.⁶⁰

Aceh y Papúa Occidental son actualmente los más visibles y agudos puntos de conflicto, pero los conflictos entre los extractores de recursos y las poblaciones locales se producen en gran parte de Indonesia. Los impactos sobre las poblaciones indígenas son tan severos como los que tienen lugar en el medio ambiente (Ver Cuadro 7-3).⁶¹

En Bougainville (isla que forma parte de Papúa Nueva Guinea), causas similares han llevado a un conflicto que ya dura doce años. La mina abierta de cobre más grande del mundo, propiedad de la compañía con base en Londres Río Tinto, comenzó a funcionar en Panguna en 1972. La pérdida de tierra y otros impactos afectaron seriamente a la agricultura de subsistencia y a las actividades de caza y recogida de alimentos de los habitantes de la zona. Los residuos de las minas y otros agentes contaminantes han dañado cerca de un quinto del área total del territorio, han diezmando la cosecha de cereales y productos comercializables como cocos y bananas, han contaminado ríos y extinguido la pesca. La mina también generó disturbios sociales mayores, incluyendo el aumento del crimen.⁶²

La mina de Panguna producía más de 500 millones de dólares en cobre, oro y plata al año. Pero los habitantes de Bougainville no recibieron prácticamente nada y sus preocupaciones fueron ignoradas. En 1988 comenzaron una campaña de sabotaje que rápidamente se desarrolló hasta convertirse en guerra de guerrillas. La mina cayó en manos de los rebeldes y se cerró en mayo de 1989. A causa de la crítica situación de ingresos de Panguna —Papúa Nueva Guinea perdió un 40% de sus ingresos en divisas y gran parte de los ingresos del gobierno— esto generó descontento social y político.⁶³

Bougainville declaró su independencia en mayo de 1990, pero no fue reconocida internacionalmente. Incapaz de recuperar la mina y vencer a los rebeldes, el gobierno se vio en la necesidad de aceptar negociaciones de paz. Aun así, en 1996 organizó un nuevo intento de invadir la isla. El primer ministro Julius Chan ofreció 36 millones de dólares en fondos del Banco Mundial a la empresa militar privada Sandline International, pero los altos mandos del ejército (indignados porque les habían reducido su propio pre-



Cuadro 7-3
Deforestación y conflicto en Borneo

La isla de Borneo es el escenario de tres décadas de conflicto entre los indígenas (los dayak) y la industria de la madera, el caucho y el aceite de palma. Los bosques de Borneo se encuentran entre los más grandes bosques tropicales que quedan en el mundo, pero el negocio de la madera ha penetrado a gran escala en estas áreas desde los años sesenta, talando un 12% de la superficie boscosa de Kalimantan sólo en los años ochenta (Kalimantan es la parte de Borneo que pertenece a Indonesia). Las enormes riquezas acumuladas por una elite pequeña pero políticamente bien relacionada (oficiales del ejército y empresarios cercanos a la dictadura de Suharto) contrasta con la amenaza mortal que la deforestación supone para los dayak, cuyo sustento —alimento, vivienda, ropa y medicinas— está estrechamente relacionado con unos bosques sanos. La tala insostenible ha producido la degradación del suelo, la colmatación de arroyos, la disminución de la vida salvaje y de la biodiversidad e inundaciones y sequías sin precedentes.

La «transmigración» propiciada por el gobierno, de personas desempleadas de las islas de Java y Madura hacia Kalimantan, proporcionó mano de obra barata para talar bosques y convertir la tierra en plantaciones comerciales de caucho y aceite de palma. Pero los dayak vieron a los migrantes como el agente de su marginalización, y los choques entre ambos grupos crecieron en frecuencia y en intensidad. A principios de 1997, una insurgencia de bajo nivel atrajo a las tropas indonesias. La represión militar consiguió imponer sólo una calma temporal, pero los enfrentamientos se repiten una y otra vez. Miles de personas han sido asesinadas y cientos de miles desplazadas.

Fuente: Ver nota final N° 61.

supuesto) forzaron a Chan a dimitir y a cancelar el contrato con Sandline. En 1998 se firmó un alto el fuego y se desplegó una pequeña fuerza de mantenimiento de la paz. En junio de 2001 el gobierno y los rebeldes acordaron que Bougainville ganaría autonomía y lograría finalmente un referéndum de independencia. Parece que se avista una solución al conflicto después de cientos, posiblemente miles, de muertes.⁶⁴

En Nigeria, uno de los productores de petróleo líderes en el mundo, la explotación del petróleo ha enriquecido a una pequeña





minoría y a compañías extranjeras pero se ha traducido en devastación medioambiental, problemas de salud y empobrecimiento de los habitantes de las áreas productoras de petróleo, que tradicionalmente habían vivido de la pesca, la agricultura y la producción de aceite de palma. El Delta del Níger, donde se encuentra la mayor parte del petróleo, es la mayor zona húmeda de África, alberga extensos manglares y es el hábitat de un gran número de especies vegetales y animales. Las malas prácticas industriales como el quemado constante de gas natural, junto con derrames frecuentes de tuberías anticuadas y escapes de residuos tóxicos, se han cobrado su pago en tierra, vegetación, agua, aire y salud humana. Las comunidades locales se quejan de problemas respiratorios, erupciones cutáneas, tumores, problemas gastrointestinales y cánceres. También se ha producido un declive drástico en la pesca y un descenso en el rendimiento de la agricultura.⁶⁵

Durante los años noventa las comunidades locales protagonizaron protestas, a menudo dirigidas las multinacionales petroleras (principalmente Royal Dutch/Shell como máximo productor, pero también Chevron, Mobil, la francesa Elf y la italiana Agip). La comunidad de los ogoni, del Delta del Níger, ha logrado atraer la atención internacional hacia su causa. El Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP) organizó protestas masivas que consiguieron cancelar operaciones de la Shell en su territorio en 1993. La dictadura militar —que obtenía del petróleo el 80% de sus ingresos— respondió con una campaña de violencia e intimidación e instigó a varios grupos étnicos del Delta a atacarse entre ellos. Unos 2.000 ogoni fueron asesinados y 80.000 expulsados de sus hogares; los líderes del MOSOP fueron detenidos u obligados a huir y, en octubre de 1995, el régimen ejecutó a Ken Saro-Wiwa, el conocido portavoz del movimiento, y a ocho líderes más.⁶⁶

Gracias a unas políticas débiles y un gobierno opresor, las petroleras han logrado eludir las leyes medioambientales de Nigeria y no han compensado a las comunidades del Delta por los daños. Aunque sus representantes niegan conocer las tácticas de represión del gobierno, acuden con frecuencia a las abusivas fuerzas de seguridad para que intervengan contra protestas pacíficas. Helicópteros de Chevron fueron utilizados en 1998 en un ataque contra manifestantes. Elf y Agip son sospechosas de haber instigado ataques mortales contra, respectivamente, mujeres en protesta y una aldea que se negó a permitir que continuaran las perforaciones



petrolíferas. Shell ayudó a financiar y armar una fuerza paramilitar en territorio ogoni. Ante la cada vez más desfavorable opinión internacional, Shell emprendió una revisión a fondo de sus actividades y actitudes hacia las comunidades del Delta del Níger. Sin embargo, como afirma un informe de 1999 de Human Rights Watch, sólo el comportamiento real de la compañía sobre el terreno juzgará si esos cambios de actitud son algo más que mera retórica.⁶⁷

La muerte del dictador militar Sani Abacha en junio de 1998 permitió una transición hacia un gobierno elegido en 1999. De acuerdo con Human Rights Watch, esto trajo una «relajación significativa en la represión sin precedentes... infligida al pueblo nigeriano». Una comisión de derechos humanos está investigando casos que se remontan a 1965 y ha recibido más de 10.000 peticiones. Aunque la atención de los medios de comunicación occidentales se ha desvanecido, las protestas y ocupaciones de instalaciones petroleras han continuado después de la muerte de Abacha. El gobierno retiró a la temida Fuerza de Seguridad Interna del territorio ogoni, pero continúan las violaciones de los derechos humanos contra aquellos que intentan expresar sus quejas en las áreas productoras de petróleo. En este aspecto, la situación en el Delta ha cambiado poco.⁶⁸

Aunque los esfuerzos de democratización en Nigeria, Indonesia y otros lugares ofrecen una mayor esperanza para la resolución de estos conflictos, es necesario mucho más para reforzar los derechos humanos y el desarrollo en las comunidades afectadas. También es necesaria una mayor conciencia y seguimiento en los principales países consumidores si se quiere romper el vínculo entre recursos y represión.

Sanciones, sistemas de certificación y diversificación económica

Los conflictos relacionados con los recursos se han mantenido, en gran parte, a causa de la aproximación basada en razones de negocios que hacen gobiernos y corporaciones (*bussiness as usual*). Pero, con la presión de las ONG, la situación está comenzando a cambiar.

Enfrentado a los interminables conflictos de Sierra Leona, Angola y la RDC, que amenazan con convertirse en una espiral fuera de control, el Consejo de Seguridad de la ONU examinó el



papel de los recursos en la perpetuación de estas guerras. También impuso embargos sobre el comercio ilícito de diamantes y sobre la adquisición de armas, equipamiento y combustibles pagados con dinero de los diamantes (Ver Tabla 7-3). Estos esfuerzos no han hecho más que comenzar. Los observadores de las ONG y grupos de expertos de la ONU han solicitado medidas similares para otros tipos de recursos pero, en algunos casos, los gobiernos han bloqueado la acción. Por ejemplo Francia y China, principales importadores de madera de Liberia, se han opuesto a las sanciones de la ONU contra las exportaciones de este producto.⁶⁹

También es evidente que las sanciones existentes están siendo violadas por personas sin escrúpulos como productores de materias primas, comerciantes, banqueros y gobiernos. Hay una urgente necesidad de incrementar los esfuerzos internacionales para realizar un seguimiento de las sanciones y para mejorar la capacidad de reforzar los embargos e investigar sus violaciones, de modo que los traficantes no puedan seguir actuando con impunidad.⁷⁰

Cada vez se hacen más esfuerzos para evitar la venta en los mercados internacionales de los recursos obtenidos a través de un conflicto. La mayor atención ha recaído en la industria del diamante. Los gobiernos de Sierra Leona, Angola y la República Democrática del Congo están respaldando planes para que sólo los diamantes con la documentación apropiada sean considerados legales. Todas las gemas deben ir acompañadas de certificados de origen, cuya «huella» digital es compartida por las autoridades en los países importadores. Aunque los diamantes pulidos no pueden ser rastreados hasta su origen, recientes avances tecnológicos permiten a algunos «sabuesos» de alta tecnología localizar el origen de las piedras en bruto comparando la cantidad de trazos de impurezas en los diamantes.⁷¹

Pero el sistema de certificados de origen puede ser debilitado por un pobre seguimiento y evitado por intrincadas redes internacionales de contrabando. Un informe de la ONU de octubre de 2001 asegura que un millón de dólares en diamantes se sigue exportando ilegalmente fuera de Angola cada día. La laxitud de los controles gubernamentales en los principales centros de comercio y talla de diamantes (Bélgica, Suiza, Reino Unido, Israel y otros) y la opaca naturaleza de la industria son otros obstáculos mayores en la lucha por erradicar los diamantes de conflicto. Un informe de investigación de la ONU, de marzo de 2000, sobre cómo se burlaron las sanciones contra UNITA, concluyó que las autorida-

Tabla 7-3. Conflictos por recursos y sanciones de la ONU

Fecha	Acción del Consejo de Seguridad de la ONU
Noviembre de 1992	Embargo de armas contra Liberia.
Septiembre de 1993	Embargo sobre el suministro de armas, equipamiento militar y combustible para los rebeldes angoleños de UNITA, después de su rechazo de los resultados electorales de 1992.
Agosto de 1997	Sanciones adicionales contra UNITA: congelación de cuentas bancarias, prohibición de viajes al extranjero de sus directivos, cierre de las oficinas de UNITA en el extranjero.
Octubre de 1997	Embargo de armas y suministro de petróleo a Sierra Leona; prohibición de viajar para los miembros de la junta militar (el embargo del petróleo terminó en 1998).
Junio de 1998	Embargo de armas y prohibición de viajar para las fuerzas antigubernamentales de Sierra Leona.
Junio de 1998	Embargo sobre las importaciones directas e indirectas de diamantes procedentes de Angola que no dispongan de un certificado de origen del gobierno angoleño.
Mayo de 1999	Se forma un grupo de trabajo para investigar las violaciones de las sanciones contra UNITA.
Julio de 2000	Embargo sobre importaciones directas e indirectas de diamantes brutos procedentes de Sierra Leona; tras la creación de un nuevo sistema de seguimiento, el embargo se limitó a las exportaciones no oficiales en octubre de 2000.
Marzo de 2001	Petición a Liberia para que cese su apoyo económico y militar al RUF y acabe con las importaciones de diamantes en bruto de Sierra Leona sin certificado oficial de origen; embargo sobre los suministros de armas a Liberia y prohibición de viajar a sus líderes políticos y militares; amenaza de embargo contra las exportaciones de diamantes de Liberia a menos que pueda demostrar que no continúa apoyando al RUF.

Fuente: Nota final N° 69.



des belgas «no consiguieron establecer un régimen eficaz de identificación de importaciones» ni tampoco «realizar un seguimiento de las actividades de intermediarios, traficantes o negociantes sospechosos». Los gobiernos belga y británico han expresado ahora su determinación de acabar con los diamantes de conflicto. Los esfuerzos para prohibir las importaciones de diamantes extraídos ilegalmente también continúan en Estados Unidos, el mayor importador. Aunque la industria inicialmente ofreció su ayuda a un contrato con estándares débiles y lagunas legales, ahora está apoyando una legislación más rigurosa introducida en ambas cámaras del Congreso de EE UU.⁷²

En vista de la facilidad con que se pueden evadir los esquemas de certificación país por país, ha aumentado el apoyo a un esquema de certificación global estandarizado. Desde mayo de 2000 representantes de 38 países, la industria del diamante y varias ONG han llevado a cabo negociaciones (a las que se refieren como Proceso Kimberley) para desarrollar un sistema internacional. Se espera que los controles Kimberley estén finalizados y presentados a la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2001. Pero las ONG se han quejado de maniobras de retroceso y estancamiento por parte de algunos gobiernos y están preocupadas por la posibilidad de que se acuerde un sistema voluntario en lugar de uno vinculante y creíble.⁷³

Medidas similares pueden ser necesarias para otros recursos de conflicto. Un sistema de certificación para la madera, por ejemplo, podría sumarse a los esfuerzos que realiza el Consejo de Certificación Forestal (FSC) para determinar si la madera se produce a un ritmo sostenible. El esfuerzo del FSC se inició en 1993 e incluye auditorías independientes para verificar el cumplimiento de una serie de requisitos. Tiene especial interés el certificado de «cadena de custodia», que intenta rastrear el origen de la madera desde los muebles en las tiendas, por todo el camino de vuelta, hasta el bosque donde se talaron los árboles. Un sistema similar podría determinar si la madera fue extraída en situaciones de conflicto.⁷⁴

Un buen número de negocios —compañías mineras y petroleras, firmas comerciales, líneas aéreas, compañías de transporte de mercancías, industrias y bancos— tiene alguna responsabilidad en los acontecimientos que han desencadenado campañas contra los diamantes sangrientos y otros recursos de conflicto. Esta responsabilidad puede ir desde un papel activo (donde las compañías están involucradas directamente y con conocimiento de la explota-



ción ilícita de recursos), hasta una complicidad silenciosa (en la que hacen negocios con regímenes represivos o grupos rebeldes a cambio de contratos lucrativos), pasando por un papel «permisivo» (en el que se hacen pocas preguntas sobre el origen de las materias primas o sobre el dinero que se blanquea).

Los embargos internacionales y los informes de la ONU han comenzado a generar mayor transparencia. Las campañas de ONG han sacado a la luz la complicidad mediante informes de investigación que señalan a empresas concretas, en un esfuerzo por obligarlas a un comportamiento más ético o finalizar sus operaciones en ciertos lugares. Estas campañas han sido más fuertes en el caso de compañías que venden productos de consumo muy visibles o cuyos logos y eslóganes resultan familiares a millones de personas.⁷⁵

Al final de los noventa, la industria del diamante fue golpeada por una ola de publicidad negativa y se enfrentó a la amenaza del boicot de los consumidores. De Beers fue avergonzada públicamente por la ONG londinense Global Witness, que reveló que la compañía había recibido conscientemente diamantes de los rebeldes de UNITA en Angola. Esto la llevó a adoptar una política más responsable y a instar a las demás empresas a seguir el ejemplo. De forma similar, cuando el papel del coltán en la guerra de la RDC se conoció más abiertamente, las compañías de electrónica consumidoras se pusieron en marcha para evitar el tipo de publicidad negativa que ya había soportado la industria del diamante. Ericsson, Nokia, Motorola, Compaq e Intel escudriñaron repentinamente sus cadenas de abastecimiento y presionaron a las firmas de procesamiento de minerales para que dejaran de adquirir coltán extraído de forma ilegal en la RDC. La aerolínea belga Sabena detuvo sus envíos de coltán a Europa.⁷⁶

Cada vez hay mayor conciencia de que los recursos naturales continuarán alimentando conflictos mortales mientras las sociedades consumistas importen y utilicen materiales sin importarles de dónde proceden y en qué condiciones se producen. Está creciendo el apoyo a la idea de que las compañías deben adoptar formas más éticas de hacer sus negocios. El activismo accionista y las campañas de inversión ética pueden ayudar a alcanzar estas metas. Pero está claro que, hasta la fecha, las actividades sólo son un comienzo. Los gobiernos y organizaciones internacionales deberán trabajar duro para lograr mayor transparencia en los negocios de financieras y otras compañías. Hasta el momento, los gobiernos occidentales han estado demasiado dispuestos a hacer «la



vista gorda» con el fin de proteger los intereses de sus propias empresas.⁷⁷

Otra área prioritaria para la acción es la proliferación masiva de armas ligeras. La conciencia del impacto de estas armas en los conflictos relacionados con los recursos y otras cuestiones ha crecido, y esto ha llevado a los gobiernos nacionales, organizaciones regionales y Naciones Unidas a buscar fórmulas para controlar su difusión, en particular los movimientos ilegales. Es especialmente notable una moratoria al comercio y fabricación de armas ligeras en África Occidental, firmada en octubre de 1998 y renovada por otros tres años en 2001. Dado que en África Occidental proliferan las armas ligeras, también está haciendo también un esfuerzo, asistido por la ONU, para recolectar armas en circulación.⁷⁸

La proliferación de armas ligeras sólo puede ser detenida con éxito mediante la cooperación internacional. En julio de 2001 se celebró una conferencia de la ONU sobre armas ligeras, en la que se esperaba lograr avances en acuerdos internacionales sobre marcaje y seguimiento de armas, regulación de los intermediarios de armamento y establecimiento de criterios más estrictos de exportación. No obstante, la oposición de unos pocos gobiernos, incluido el de Estados Unidos, estuvo a punto de desbaratar la conferencia. La administración Bush se opuso a medidas como la restricción de la tenencia de armas ligeras por los civiles, la prohibición de las ventas a entidades no gubernamentales (como grupos rebeldes) y cualquier limitación al comercio legal. Aunque el desenlace fue un programa de acción de bajo denominador común, proporciona una base para los esfuerzos por conseguir el desarme en situaciones posconflicto, destruir las armas ilegales y sobrantes, desmovilizar a los combatientes y reintegrarlos en la sociedad civil y, lo más importante, mejorar la transparencia y un mayor conocimiento de las transferencias de armamento.⁷⁹

La experiencia hasta la fecha también proporciona un fuerte argumento para mejorar las capacidades en mantenimiento de la paz. Los conflictos en Angola y Sierra Leona han atraído dos de las mayores fuerzas de pacificación de la ONU y el Consejo de Seguridad ha considerado la viabilidad de una fuerte presencia en la RDC. Pero estos esfuerzos se enfrentan a diversos y serios obstáculos. El primero se refiere a los bandos en guerra, que acceden a acuerdos de alto el fuego o incluso a acuerdos de paz como medidas que les permiten maniobrar para tomar ventaja y volver a la violencia cuando resulte oportuno.



También hay debilidades sistemáticas en los mecanismos de mantenimiento de la paz de la ONU. Dado que no tiene fuerzas propias, Naciones Unidas depende de los gobiernos nacionales para disponer de equipamiento y personal. Habitualmente, se necesitan varios meses para que una misión alcance su fuerza de despliegue autorizada. A menudo el número de efectivos es inadecuado a la tarea y muchos de ellos están mal equipados y pobremente entrenados. Los contingentes nacionales no suelen trabajar bien juntos y a veces no cumplen los mandatos de las misiones.⁸⁰

Superar las deficiencias de la actual aproximación al mantenimiento de la paz no sólo haría aumentar las posibilidades de éxito a la hora de poner fin a los conflictos en curso; probablemente, también sería disuasorio para los futuros saqueadores de recursos. Un sistema de pacificación eficaz, capaz de desplegar a tiempo tropas bien equipadas y entrenadas y de proteger a las víctimas en lugar de adoptar una falsa neutralidad, supondría una importante diferencia. Un sistema eficaz tendría capacidad para tomar el control de las áreas ricas en recursos que están siendo ilegalmente explotadas, interceptar las rutas de contrabando, reforzar los acuerdos de paz y facilitar el desarme y la desmovilización de los combatientes. Para establecer un sistema de esta naturaleza, los gobiernos deben estar preparados para invertir dinero, esfuerzo y apoyo político.

Las políticas que aquí se discuten van más dirigidas a reaccionar ante un conflicto basado en recursos que a prevenir otros. La prevención no es una tarea fácil y no hay una única receta. Promover la democratización, la justicia y un mayor respeto por los derechos humanos son tareas clave, junto con los esfuerzos por acabar con la impunidad de algunos gobiernos y grupos rebeldes que ejercen una violencia extrema. Otro reto es facilitar la diversificación de la economía, alejándola de la fuerte dependencia de las materias primas para crear una mezcla más amplia de actividades.

La búsqueda de un desarrollo sostenible, que constituye el centro de atención de la conferencia de Johannesburgo, es de crucial importancia en este contexto. Invertir en desarrollo humano, mejorar los servicios de educación y de salud y proporcionar trabajo adecuado y oportunidades para el avance social y económico es el largo camino a recorrer para reducir el riesgo de que un legado rico en recursos naturales se convierta en una ruina. En ello debe implicarse no sólo cada gobierno, sino el Banco Mundial y otras



agencias multilaterales de desarrollo que han financiado generosamente proyectos de extracción de petróleo, minería y tala de árboles. También debe ser una prioridad para los países ricos, que durante tanto tiempo se han beneficiado de los suministros de materias primas baratas mientras hacían caso omiso de la destrucción que dejaban detrás.

Prioridades de la Cumbre Mundial sobre conflictos

- Desarrollar sólidos sistemas de certificación global para diamantes, madera y otros recursos, que permitan mejorar la capacidad de conocer su origen y eliminar aquellos que sean producidos y comercializados de forma ilícita en áreas de conflicto.
- Asegurar el cumplimiento de las sanciones de la ONU contra el tráfico ilegal de recursos, aumentando la capacidad de Naciones Unidas, organizaciones regionales e internacionales y gobiernos para vigilar y reforzar los embargos.
- Aumentar la transparencia y responsabilidad de las empresas petroleras, mineras y madereras en áreas de conflicto, de compañías comerciales y de transporte, bancos y otras instituciones financieras. Desarrollar severos códigos de conducta para las empresas y agentes.
- Reducir la disponibilidad de armas ligeras aplicando estrictos criterios nacionales de exportación, regulando a los intermediarios, marcando y rastreando el armamento y mejorando la recogida de excedentes.
- Fomentar la democratización y un mayor respeto por los derechos humanos, en particular los derechos de indígenas y grupos minoritarios.
- Ayudar a la diversificación de las economías alejándolas de la fuerte dependencia de las materias primas.
- Incrementar la conciencia de los consumidores sobre las conexiones entre la extracción de recursos y los conflictos.